

TRÁMITE: Recurso de Revocatoria presentado por la Cooperativa de Servicios Eléctricos Uyuni Ltda. (COSEU) en contra de Resolución AE N° 141/2010 de 26 de abril de 2010, por la cual se establece la aplicación de reducciones en la remuneración de COSEU, emergente del Control de Calidad de Distribución de Electricidad del Servicio Comercial.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Desestimar el recurso de revocatoria interpuesto por COSEU en contra de la Resolución AE N° 141/2010 de 26 de abril de 2010; consiguientemente, confirmar en todas sus partes el acto administrativo impugnado.

VISTOS:

La Resolución AE N° 141/2010 de 26 de abril de 2010, notificada el 19 de mayo de 2010; la nota presentada el 02 de junio de 2010 y registrada en la AE con código 4906, por la cual COSEU interpone Recurso de Revocatoria en contra de Resolución AE N° 141/2010 de 26 de abril de 2010; el Decreto DOC-134-10 de 04 de junio de 2010; el memorial presentado por COSEU el 22 de junio de 2010 con código de registro 5507; el Decreto DOC-172-10 de 24 de junio de 2010; todo lo que convino ver, tener presente y:

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que en fecha 26 de abril de 2010 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de electricidad (AE) emitió la Resolución AE N° 141/2010, que dispone la aplicación de reducciones en la remuneración de COSEU, emergente de la evaluación del Servicio Comercial correspondiente al periodo Mayo – Octubre 2008.

Que en fecha 02 de junio de 2010, mediante nota registrada en la AE con código 4906, COSEU interpuso el recurso de Revocatoria en contra de la Resolución AE N° 141/2010 de 26 de abril de 2010.

Que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) emite el Decreto DOC-134-10 de 04 de junio de 2010 mediante el cual se hacen observaciones a ser subsanadas por COSEU, en cumplimiento a la normativa administrativa vigente.

Que en fecha 22 de junio de 2010 registrado con código 5507, COSEU presentó memorial mediante el cual señala haber acreditado el poder de su representante en el procedimiento previo de control de calidad.

Que en consecuencia la AE emitió el Decreto DOC-172-10 de 24 de junio de 2010, señalando que cada procedimiento se sustancia y documenta de modo independiente, siendo el recurso de revocatoria un nuevo trámite, debiendo subsanar lo observado mediante Decreto DOC-134-10 en el plazo de cinco días administrativos, computables a partir de la notificación con el decreto, notificación realizada el 29 de junio de 2010.

CONSIDERANDO: (Fundamentación legal)

Que el parágrafo I del Artículo 56 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, establece que los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente,

siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos e intereses legítimos.

Que el Artículo 64 de la referida Ley, establece que el recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación.

Que asimismo, el Artículo 89 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, aprobado mediante D.S. N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, establece que el recurso de revocatoria será resuelto en 30 (treinta) días hábiles administrativos, desestimando, aceptando o rechazándolo.

Que el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, aprobado mediante D.S. N° 27172, establece la forma de presentación de los recursos administrativos.

Que el artículo 58 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, norma que la forma de presentación de los recursos es necesariamente de manera fundada y cumpliendo los requisitos y formalidades en los plazos que establece la ley.

Que el Artículo 13 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, respecto a la representación, manda que toda persona que formule solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado.

Que el representante o mandatario, deberá exhibir poder notariado para todas las actuaciones administrativas.

Que el artículo 26 del Reglamento aprobado por D.S. N° 27172, establece la obligación de todos los administrados a señalar domicilio procesal, en la primera actuación en la que intervengan, dentro del asiento del radio urbano de la entidad u oficina regional respectiva.

Que el Artículo 21 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, norma respecto al cómputo de los términos y plazos administrativos, en cuyo parágrafo II se establece que, comenzarán a correr desde el día siguiente hábil al que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento.

Que el parágrafo III del Artículo 21 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, establece el plazo adicional de cinco días hábiles, para las actuaciones que tuviesen que cumplirse en un Municipio distinto a la sede de la entidad pública.

Que el Artículo 87 del Reglamento aprobado al D.S. N° 27172, señala que si el escrito de presentación del recurso de revocatoria no reúne los requisitos esenciales, se requerirá al recurrente subsane las deficiencias observadas o acompañe los documentos extrañados dentro de los cinco días siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de desestimación del recurso.

CONSIDERANDO: (Análisis)

Que el recurso de revocatoria, como acto de impugnación en sede administrativa requiere, del cumplimiento de requisitos que se establecen en la normativa, que hacen a la procedibilidad recursiva, en primer lugar los requisitos formales, tales como: la legitimación de actuar, recurso presentado por escrito, interposición ante la autoridad que emitió el acto administrativo cuya impugnación se pretende, oportunidad en la interposición, cumplimiento a las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, etc., de conformidad a la previsión normativa contenida en el Artículo 86 del reglamento para el SIRESE de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por D.S. N° 27172, "Los recurrentes legitimados presentarán sus recursos por escrito ante el Superintendente Sectorial que emitió la resolución impugnada individualizando el acto objeto de impugnación e indicando el derecho subjetivo o interés legítimo que invocan, dentro del plazo y con las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo."

Que en observancia y cumplimiento de las determinaciones del Artículo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo N° 2341, "I. Toda persona que formule solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado. II. El representante o mandatario, deberá exhibir poder notariado para todas las actuaciones administrativas...", la AE emitió el Decreto DOC-134-10 de 04 de junio de 2010 y posteriormente el Decreto DOC-172-10 de 24 de junio de 2010.

Que el citado Decreto DOC-134-10, también observó se subsane el señalamiento de domicilio; al respecto se puede entender el señalamiento de domicilio procesal, como un requisito de procedibilidad no esencial, ya que el mismo artículo 26 del Reglamento aprobado por D.S. N° 27172, tiene la previsión de que, en caso de falta de señalamiento o bien si este no se encuentra dentro del radio urbano de la entidad u oficina regional correspondiente, se tendrá por domicilio procesal la secretaría de la entidad pública.

Que diametralmente opuesta es la esencial incidencia procesal del requisito de acreditación de la representación legal, ya que es el primer requisito que avala la legitimación del administrado actor, que invoca un derecho subjetivo o interés legítimo, por sí o por tercera persona, mediante poder de representación debidamente acreditado.

Que como se ha manifestado, en cuanto al requisito de señalamiento del domicilio procesal, la misma norma prevé la solución o consecuencia legal, de la inobservancia a los supuestos legales, sin embargo, respecto al requisito de la acreditación de representación y legitimación de obrar, no sucede lo mismo, lo cual demuestra que es un requisito esencial de procedibilidad y como tal, no puede ser desadvertido por la Administración Pública en la sustanciación del procedimiento.

Que es tal la importancia de ello, que el Artículo 87, establece que cuando el administrado no cumpla con los requisitos formales esenciales en la interposición del recurso administrativo y habiendo sido requerido a la subsanación, esta no se cumpla, la consecuencia es negativa para el administrado, habilitando la desestimación correspondiente.

Que en atención a los antecedentes citados, se considera que la recurrente tuvo a su alcance la posibilidad de presentar impugnación en cumplimiento a las formalidades que la

normativa prevé; adicionalmente tuvo la oportunidad de realizar la subsanación correspondiente en dos oportunidades, sin que el administrado pueda alegar desconocimiento de la normativa aplicable.

Que la apertura de la competencia del órgano, a efectos de la revisión de propio obrar, pasa ineludiblemente por la constatación de tales exigencias, siendo la primera de ellas el advertir si el referido recurso, inicialmente, ha salvado la exigencia formal en cuanto a la presentación oportuna del documento que consigna la acreditación de la representación legal de quien presenta la solicitud que da inicio al procedimiento administrativo, según señala el Artículo 13 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Que según se evidencia en el presente recurso de revocatoria el Decreto DOC-172-10 fue notificado el 29 de junio de 2010, es decir que la subsanación observada debía cumplirse hasta el 06 de julio de 2010, sin embargo COSEU no realiza la subsanación. Cómputo que considera que consta en el expediente el expreso señalamiento de domicilio en la Cámara Boliviana de Electricidad, ubicada en calle Colón N° 150, edificio Litoral, piso 7 de la ciudad de La Paz, domicilio donde se han practicado todas las notificaciones y a las cuales COSEU ha estado a derecho, presentándose oportunamente.

Que no es posible soslayar la presentación inadecuadamente del recurso, asimismo es insoslayable el actuar sin legitimación para recurrir, atentos al orden público y de inexcusable cumplimiento que revisten las normas que rigen la tramitación de la impugnación, según impone la Ley del Procedimiento Administrativo N° 2341 y el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, aprobado mediante D.S. N° 27172; que goza de aplicación preferente, de conformidad a la previsión normativa de su Artículo 48, en concordancia con la Disposición Adicional Segunda del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado por D.S. N° 27113.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que, luego del análisis y consideración de los requisitos, en este caso formales, en la interposición del recurso de revocatoria, es claro que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), ante la presentación de la impugnación sin la debida acreditación de representación legal, cuya subsanación se requirió en dos oportunidades, no puede abrir su competencia en la labor de revisión del acto administrativo por ella emitido, debiendo pronunciarse la desestimación del mismo, conforme a la normativa imperativa aplicable dispuesta en el Artículo 87 y 89 parágrafo II inciso a) del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE aprobado mediante Decreto Supremo N° 27172, en aplicación del Artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341.

CONSIDERANDO: (Competencia de la AE)

Que el Artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, dispuso entre otros, la extinción de la Superintendencia de Electricidad, en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de la misma serían asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. En tal sentido, se aprobó el Decreto Supremo N° 0071 de 07 de mayo de 2009, el cual, en el Artículo 3 determina la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE, estableciendo que las atribuciones, competencias, derechos y

RESOLUCIÓN AE N° 303/2010

TRÁMITE N° 659

La Paz, 7 de julio de 2010

obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, por lo que, siendo que las normas expuestas no contradicen la Carta Magna, corresponde su aplicación al presente caso de análisis.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, en atención a las consideraciones y conclusiones del Informe AE DOC N° 322 A/2010 de 07 de julio de 2010, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

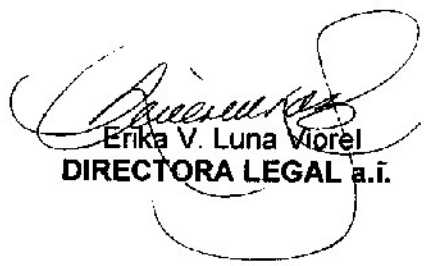
ÚNICO.- Desestimar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Cooperativa de Servicios Eléctricos Uyuni Ltda. (COSEU), mediante nota presentada el 02 de junio de 2010 con código de registro 4906, en contra de Resolución AE N° 141/2010 de 26 de abril de 2010, por consiguiente se confirma en todas sus partes el acto administrativo impugnado, de conformidad con el inciso a) del párrafo II del Artículo 89 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado para el SIRESE con D.S. N°. 27172, concordante con el Artículo 87 del mismo Reglamento y el Artículo 13 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Nelson Caballero Vargas
DIRECTOR EJECUTIVO

Es conforme:



Erika V. Luna Viórel
DIRECTORA LEGAL a.i.